



## O F I C I O

S/REF.: Expediente nº **001-074888**  
FECHA: 2 de febrero de 2023  
ASUNTO: Migraciones India y Pakistán

DESTINATARIO: [REDACTED]

El día 30 de diciembre de 2022 tuvo entrada en esta Dirección General una solicitud de información efectuada por [REDACTED] a través del Portal de la Transparencia, con número de expediente arriba referenciado, en la que solicitaba:

*“Me gustaría conocer las cifras de migrantes procedentes de India y Pakistán que han llegado a España desde 2020 hasta 2022. En la misma línea, también me gustaría conocer cuántos de ellos han solicitado volver a sus países en el mismo período temporal”.*

Se significa que este Centro Directivo hizo requerimiento a la [REDACTED] para concretar si solicitaba la información sobre migrantes legales o ilegales, aclarando que quería ambos datos.

Una vez analizada la presente solicitud, se ha resuelto conceder el acceso parcial a la información solicitada, cifras que reflejan el total de nacionales de India y Pakistán que han **accedido regularmente** (con cruce de frontera) a territorio nacional durante el periodo solicitado, sin poder determinar si proceden directamente de dichos países, como indica la redacción de la solicitud. Téngase en cuenta que con India y Pakistán hay vuelos de conexión, de cuyo pasaje no consta su procedencia originaria, sólo su nacionalidad.

- Nacionales de **India** que han accedido **regularmente** a España desde 2020-2022: **152.503**.
- Nacionales de **Pakistán** que han accedido **regularmente** a España desde 2020-2022: **198.284**.

Respecto a la pregunta de “...cuántos de ellos han solicitado volver a sus países”, se significa que de dichas cifras no es posible discernir entre los que han regresado tras su paso por España, de aquellos que se han regularizado o de los que hayan podido devenir en estancia irregular.

Atendiendo a la **aclaración** de la [REDACTED] realizada en el requerimiento de este Centro Directivo, donde especifica que también solicita las personas migrantes entradas en territorio español de manera ilegal, se le informa que las FFCCSS desconocen este dato pues sólo se recogen en las estadísticas las personas detenidas propuestas para sanción conforme a la legislación vigente en materia de extranjería.



No obstante, la información referente a inmigración irregular está publicada en la web del Ministerio del Interior a través del siguiente enlace:

<https://www.interior.gob.es/opencms/es/prensa/balances-e-informes/>

Se significa, que no se facilitan los datos relativos a la nacionalidad de las personas detenidas propuestas para sanción, ya que el conocimiento y difusión de este parámetro podría derivar en problemas en las relaciones exteriores de España con los posibles países afectados, dificultando en el futuro poder documentar por parte de las diferentes Embajadas y Consulados a ciudadanos extranjeros irregulares. Todo ello afectaría gravemente a la eficacia de nuevas expulsiones, aplicándose en este caso el artículo **14.1c)** de la LTAIPBG, que dice: *"El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: c) Las relaciones exteriores"*.

Esta limitación ha sido avalada por propio el Consejo de Transparencia en numerosas ocasiones manifestando al respecto que *"dadas las circunstancias que rodean los procedimientos de expulsión, principalmente a su vinculación con la imagen pública del país de origen de estos ciudadanos y de la importancia de la colaboración de las autoridades nacionales en las labores de documentación, considera que el conocimiento de la restante información solicitada sí podría suponer un perjuicio, razonable y no hipotético, a las relaciones exteriores de España, comprometiendo la colaboración de los Estados de origen. Asimismo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de expulsión se configura como una sanción de carácter administrativo, las dificultades derivadas de su identificación podrían perjudicar a la propia resolución del expediente de expulsión y, en consecuencia, a la sanción de la infracción cometida"*.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA**



**Francisco Pardo Piqueras**